Violencia paramilitar en sectores económicos clave en Honduras: el brazo violento del «desarrollo»

Jasmin Hristov*
Karen Spring**

Resumen. Catalogado como uno de los países con mayor incidencia homicida y feminicida en el mundo, Honduras ha sido expuesto como un foco de violencia perpetrada por los cárteles de la droga y las pandillas. No obstante, reducir el problema de la violencia a la criminalidad es inexacto porque se centra en los síntomas, en detrimento de las causas fundamentales, además de que se incentiva una mayor injerencia del Ejército y la Policía, organismos responsables de graves violaciones de derechos humanos. En el fondo, subyace la violencia política, es decir, la violencia y represión contra los defensores de la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos, quienes buscan alternativas a los proyectos agroindustriales, mineros e infraestructurales. En la última década, actores estatales y no estatales, como los paramilitares, han perpetrado una violencia al servicio del capital. La violencia paramilitar es funcional a la acumulación de capital a gran escala en la agroindustria, turismo, minería y energía; también abona a la imposición de reformas neoliberales en la gestión territorial, la educación y la salud. La violencia paramilitar al servicio de corporaciones locales y extranjeras ha tenido lugar en un entorno militarizado que despliega una violencia estatal que reprime y criminaliza a los movimientos sociales. Honduras destaca como uno de los cuatro países de América Latina con mayores niveles de violencia y criminalización, fenómenos correlacionados.

Palabras clave: capitalismo, neoliberalismo, violencia, paramilitares, Honduras.

* Estadounidense. Profesora asistente en el Departamento de Sociología y Antropología y en el Instituto Guelph de Estudios del Desarrollo.
** Canadiense. Activista e investigadora de los derechos humanos y coordinadora de la Red de Solidaridad con Honduras (HSN).
Traducción del inglés al español por Paula Jiménez Argumosa.

Paramilitary violence in key economic sectors in Honduras: the violent arm of «development»

Abstract. Classified as one of the countries with the highest incidence of homicide and femicide in the world, Honduras has been revealed as a flashpoint for violence perpetrated by the drug cartels and gangs. However, to reduce the problem of violence to simply «criminality» is inexact because it focuses upon the symptoms, to the detriment of the core causes, and which drives increasing involvement in the Armed Forces and the Police, bodies that are responsible for grave violations of human rights. At its core lies a foundation of political violence —that is, the violence and repression against the defenders of the earth, environment, and human rights— those who search for alternatives to agro-industrial, mining and infrastructure projects. Over the past decade, state and non-state actors, such as paramilitaries, have perpetrated violence in the service of capital. Paramilitary violence is functional for the large-scale accumulation of capital in agro-industry, tourism, mining and energy; it also drives the imposition of neoliberal reforms in land management, education and health. Paramilitary violence in the service of local and international corporations has occurred within a militarized context that extends state violence to repress and criminalize social movements. Honduras stands out as one of the four countries in Latin America with the highest levels of violence and criminalization, interrelated phenomena.

Keywords: capitalism, neoliberalism, violence, paramilitaries, Honduras.

Introducción

Honduras ha sido clasificado en repetidas ocasiones entre los diez países con mayores tasas de homicidio del mundo durante la última década, así como el país con una de las tasas de feminicidios más altas del mundo. Tradicionalmente, académicos, analistas y líderes políticos han atribuido esta violencia a las pandillas o maras y al crimen organizado, en específico al narcotráfico (Cantor y Rodríguez, 2015; Moncada, 2013). Sin embargo, detrás de los cárteles de la droga y las pandillas se esconde un tipo de violencia diferente. Global Witness ha denominado reiteradamente a Honduras como el país más mortífero per cápita para los defensores de la tierra y el medio ambiente (Orsi y DiLorenzo, 2018; Defensores en Línea, 2016). Es uno de los países con la expresión más aguda de una tendencia global caracterizada por la violencia y la represión contra defensores de la tierra y el medio ambiente en el marco de proyectos agroindustriales y de minería e infraestructura en expansión (Hristov, 2020). Además, ha sido descrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como «uno de los países más hostiles y peligrosos para los defensores de derechos humanos» (Human Rights Watch, 2018).

Detrás de la reputación de que el peligro de Honduras son las pandillas existe una realidad invisibilizada; el país enfrenta una ola de violencia política sin precedentes, que apunta a movimientos, organizaciones e individuos que buscan una alternativa al modelo mercantil que puede describirse como neoliberalismo con esteroides: «La gente fuera de Honduras cree que Honduras es un país peligroso debido a las pandillas (...) Que este es el principal problema del país, pero no saben que la imposición de

un modelo que nos empobrece y nos despoja de nuestras tierras, y que es violento en sí mismo, es más problemático».[1] Claramente, reducir toda la violencia a la actividad criminal no sólo es inexacto, sino que también daña profundamente cualquier esfuerzo que busque abordar las causas. Debido a que los discursos dominantes son incapaces de definir cualquier otro tipo de violencia que no sea criminal, el enfoque se ha centrado en tratar los síntomas (en oposición a las causas fundamentales), y el remedio ha consistido en fortalecer la seguridad invirtiendo fondos en el Ejército y aparatos de la policía del Estado —los mismos organismos responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Entonces, ¿quiénes son los perpetradores de la violencia política en Honduras? Tanto actores estatales como no estatales se involucran en la violencia al servicio del capital. Durante los últimos 10 años, el país ha exhibido una proliferación de la violencia paramilitar junto con la violencia dirigida por el Estado. La violencia paramilitar en este caso ha sido ejercida por una variedad de actores: guardias de seguridad privada, militares en activo, exmilitares u otro personal de seguridad del Estado que participa en acciones que exceden sus obligaciones legales, sicarios (pistoleros a sueldo), pandilleros y grupos armados al estilo paramilitar. Si bien la violencia paramilitar definitivamente tiene lugar en Honduras, a diferencia de países como Colombia y México, los grupos paramilitares todavía se encuentran en las primeras etapas de formación.

En este artículo presentamos dos argumentos principales: *1.* La violencia paramilitar ha sido instrumento para la expansión y consolidación de operaciones capitalistas a gran escala en los sectores de la agroindustria, el

[1] Entrevista personal con miembros del Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz (Milpah), Honduras, 20 de octubre de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

turismo, la minería y la energía, así como la imposición de reformas neoliberales en la gestión territorial, la educación y los sectores de la salud; todos contra la resistencia de las poblaciones afectadas. *2.* La violencia paramilitar al servicio de corporaciones locales y extranjeras casi siempre ha tenido lugar en un entorno altamente militarizado, caracterizado por la violencia estatal, la represión y la criminalización de los movimientos sociales, donde colaboran actores estatales y no estatales directamente o al menos facilitan las operaciones. De hecho, existe una correlación entre los altos niveles de violencia y de criminalización, y Honduras es uno de los cuatro países de América Latina que ocupan el primer lugar en ambos.

Contexto económico y político

La historia de Honduras, como la de muchos de sus vecinos latinoamericanos, se ha caracterizado por profundas desigualdades raciales y de clase, un proceso continuo de despojo de tierras y violencia empleada por quienes tienen poder económico y político contra la mayoría social —trabajadores y pobres—, con el propósito de mantener el control sobre los recursos y la mano de obra, y eliminar o reprimir la disidencia. En 1960, la implementación y expansión de las protecciones sociales, así como la distribución de tierras a comunidades empobrecidas de las zonas rurales, se vieron como una forma de «evitar el contagio revolucionario» en Honduras, particularmente con la victoria de la Revolución cubana en 1959 (FIAN, 2017). Por ejemplo, una ley firmada en 1961 promovió la conquista de la frontera agrícola, como las tierras estatales en el Valle del Aguán, por campesinos y trabajadores sin tierra, y se promovió la creación de empresas campesinas cooperativas.

En las décadas de 1970 y 1980 la política exterior del gobierno de Estados Unidos hacia Centroamérica cambió a medida que crecía la preocupación por el aumento de la influencia de la Unión Soviética, en el contexto global de la Guerra Fría y a medida que los conflictos armados amenazaban el *statu quo* y el poder de Estados Unidos en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Durante la década de 1980 Estados Unidos buscó una solución militar a la amenaza de la izquierda de Nicaragua, Guatemala y El Salvador, por lo que convirtió a Honduras en una base regional de actores armados estatales y no estatales para llevar a cabo tácticas de contrainsurgencia y esfuerzos de desestabilización contra las fuerzas revolucionarias en estos países vecinos (Conadeh, 2002).

Fue en este clima autoritario cuando el enfoque previo de sostenibilidad alimentaria y redistribución de la tierra, que caracterizó las décadas de 1960 y 1970, llegó a su fin. La mitad de la década de 1980 marcó el inicio de las reformas neoliberales en Honduras bajo el gobierno de José Azcona (Loperena, 2017). Como en otras partes de América Latina, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ofrecieron una reestructuración de la deuda condicionada a la implementación de políticas neoliberales agresivas orientadas a la apertura de territorios, recursos y mano de obra, al capital global. La receta del BM para Honduras tenía un claro énfasis en un «marco macroeconómico estable» que garantizaría «certeza para la inversión privada» (Banco Mundial, 2001).

Las consecuencias para la mayoría social han sido devastadoras. En la actualidad, Honduras es el segundo país más desigual de América Latina, después de Colombia, y el sexto país más desigual del mundo, según el BM (*World Politics Review*, 2017), con un coeficiente de Gini de 50.4 (Banco Mundial, 2018). Desde el golpe de Estado de 2009, la pobreza y la desigualdad han

ido aumentando: 20% más enriquecido incrementó sus ingresos en más de 8%, mientras que 20% más empobrecido sufrió una disminución de 7.4%. Según estadísticas conservadoras del Instituto Nacional de Estadística de Honduras, en 2017, 64% de la población vivía en la pobreza y 40% en la extrema pobreza (Mejía, 2017), pero otros, como el periodista Bartolo Fuentes, sostienen que las cifras son incluso superiores.[2]

Como ha demostrado la historia, los oprimidos no son víctimas pasivas y Honduras no es una excepción. Más de 30 años de despojo, asaltos al tejido asociativo de las comunidades y erosión de los programas sociales han producido numerosos movimientos sociales desde abajo con una clara agenda antineoliberal que ha presentado un desafío permanente a las élites y sus aliados capitalistas extranjeros al resistir y luchar contra la legislación y las políticas económicas favorables al mercado, que los condenan al hambre y a la muerte. Es aquí donde la violencia ha servido como instrumento indispensable para los grupos económica y políticamente dominantes.

Violencia procapitalista

No toda la violencia colectiva en Honduras se puede explicar a través de las actividades de las organizaciones criminales y las pandillas. Los militares estatales, la policía y otros miembros de su aparato coercitivo, así como los actores armados no estatales, se involucran en la violencia procapitalista —un tipo de violencia que es funcional para el capital al crear, reproducir o restaurar las condiciones para la acumulación de capital. El concepto

[2] Entrevista personal con el periodista Bartolo Fuentes, Honduras, 20 de octubre de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

de violencia procapitalista desarrollado por Hristov (2020) invita a conceptualizar una nueva forma de violencia —no en términos de los actores que la ejercen, sino en términos de sus implicaciones estructurales— en función de su relación con las estructuras de clase. Una de las razones por las cuales la violencia procapitalista es de naturaleza estructural es que interactúa con las estructuras legales, en particular la legislación económica y de seguridad. Este aspecto es muy pertinente para el caso de Honduras. Como se demostrará en este artículo, el uso sistemático de la violencia contra periodistas, estudiantes, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y otros sectores de la sociedad civil no puede explicarse como producto de la criminalidad, abuso de poder o coincidencias accidentales entre las actividades de los actores armados y los intereses capitalistas. La violencia procapitalista se utiliza cuando personas y colectivos se manifiestan contra la reestructuración económica neoliberal discutida previamente. La violencia llevada a cabo, no sólo por actores estatales sino también no estatales, sirve para hacer cumplir leyes y políticas económicas neoliberales que facilitan la acumulación del capital, frente a la resistencia de la población adversamente afectada. Al mismo tiempo, la legislación en materia de seguridad legitima la violencia dirigida a neutralizar los obstáculos que surgen de los agravios de los movimientos sociales desde abajo y criminalizar a quienes obstaculizan los avances del capital.

Violencia paramilitar como un tipo de violencia procapitalista

La violencia procapitalista se presenta en diferentes modalidades: producto del tipo de actor (estatal/no estatal) y si la violencia contraviene la

legislación existente. Debido a que académicos y funcionarios del Estado suelen clasificar la violencia según el tipo de actor armado, los casos de violencia procapitalista en Honduras y otros países de América Latina terminan categorizados simplemente como violencia criminal relacionada con actividades de pandillas u organizaciones del narcotráfico. Por lo tanto, es crucial reconocer las diferentes modalidades: *1.* Estatal legal. *2.* Estatal ilegal. *3.* No estatal legal. *4.* No estatal ilegal.

La primera modalidad se lleva a cabo por actores estatales dentro de los parámetros de sus deberes legalmente prescritos; por ejemplo, «contener» (es decir, reprimir) las protestas para mantener el orden y la seguridad, o desalojar a los campesinos con relación al cumplimiento de una orden judicial. La segunda modalidad es efectuada por actores estatales que participan en acciones fuera de su servicio; por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas. La tercera es la de actores armados no estatales que realizan operaciones que no contravienen la legislación existente; por ejemplo, personal de seguridad privada que dispara para proteger a su cliente en un ataque. La cuarta ocurre cuando los actores armados no estatales se involucran en actividades que *a)* están fuera de sus obligaciones habituales (como parte de un trabajo asalariado), pero que no violan directamente ninguna ley, como el personal de seguridad privada que acompaña a la policía estatal en casos de desalojo, o para participar en registros y detenciones arbitrarias de personas; y *b)* son contrarios a la ley como asesinatos, amenazas, violaciones, torturas, desplazamientos forzados y secuestros. En esta modalidad (4b) pueden existir actores que se encuentran empleados formalmente, como guardias de seguridad privada que durante o fuera del horario de su trabajo formal realizan violencia ilegal, o actores que sólo trabajan en la realización de actos de violencia ilegal,

es decir, *sicarios* a tiempo completo. Categorizamos dos modalidades de violencia procapitalista, 2 y 4, como violencia paramilitar —esto es, actores estatales que participan en violencia fuera de su servicio legalmente prescrito y actores armados no estatales que participan en violencia más allá de la definición formal de su trabajo (si lo hay) e infligen daño a civiles de manera ilegal.

En Honduras, tanto la violencia estatal como paramilitar sustentan estructuras de poder institucionalizadas. Así, actos de violencia, como la represión violenta de las protestas estudiantiles o la violencia sexual vivida por mujeres lideresas comunitarias contra la minería, contrastan con la violencia de pandillas que surge de la guerra con pandillas rivales, extorsión y control social no orientado a reproducir relaciones institucionalizadas de acumulación del capital.

Los actores estatales (militares) o no estatales (personal de seguridad privada) utilizan la violencia descrita en todas las modalidades, junto con un grupo armado de civiles reclutados localmente o residentes integrados en las comunidades locales que emplean la violencia descrita en la modalidad 4. Estos reclutas locales o bandas (grupos delictivos organizados localmente a pequeña escala) cuentan con una cultura y unos conocimientos locales y pueden aportar información esencial que ayude a identificar a los agentes clave que representan una amenaza para los intereses capitalistas. Las bandas no sólo ejercen violencia, sino que también generan terror psicológico, que es particularmente efectivo cuando los grupos o comunidades en resistencia están extremadamente unidos y no se ven afectados por la violencia estatal.

Militarización y criminalización: dos condiciones esenciales para la violencia paramilitar

La violencia paramilitar en Honduras ha sido llevada a cabo por personal de seguridad privada, militares en activo o exmilitares u otro personal de seguridad del Estado, sicarios (pistoleros contratados), pandilleros, bandas de narcotraficantes y grupos de civiles armados al estilo paramilitar. Es importante señalar que la proliferación de la violencia paramilitar en el país ha concordado con un resurgimiento de las prácticas de contrainsurgencia, desde la Guerra Fría, y justificadas bajo el mantra de la guerra contra las drogas. En 2009, Estados Unidos creó la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI, por sus siglas en inglés), que surgió de la Iniciativa Mérida entre México y Estados Unidos. CARSI recibió un presupuesto de 496 millones de dólares entre 2008 y 2013; el programa fue diseñado para incluir la participación de contratistas privados de seguridad, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), así como las fuerzas militares de Estados Unidos y Colombia, para combatir las organizaciones criminales y el narcotráfico. En 2011, el Pentágono aumentó su gasto en contrataciones en Honduras a 53.8 millones de dólares (Paley, 2014). El Plan Colombia, así como las organizaciones paramilitares colombianas, han servido como modelo para el diseño de reformas policiales y de militarización en Honduras, que han fortalecido el poder de las fuerzas de seguridad del Estado, han aumentado la militarización y han facilitado la «cooperación» entre la seguridad pública y privada.

Este fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado a través de una mayor militarización y la proliferación de asociaciones de seguridad público-privadas ha ido acompañado de una legislación de seguridad orientada

a la flexibilización del uso del «estado de emergencia» y la criminalización de la protesta social y el activismo por el derecho a la tierra y protección del medio ambiente. Un ejemplo de ello son las reformas del artículo 335 del Código Penal, realizadas en el 2017, que ampliaron la definición de lo que constituye el delito de terrorismo. La CIDH y otras entidades han expresado su preocupación por la ambigüedad de los delitos definidos en la reforma, que permiten interpretaciones muy dispares y sanciones sobre conductas que no corresponden a la gravedad y naturaleza del delito de terrorismo (OEA, 2017) y, en consecuencia, perjudican el trabajo de defensores de derechos humanos, periodistas y movimientos sociales. La criminalización de la disidencia se manifiesta en detenciones arbitrarias durante manifestaciones o acciones de recuperación de tierras, detenciones como parte de procesos judiciales, prolongación de procesos judiciales en los que se restringe enormemente la acción y libertad de movimientos de las víctimas, y estigmatizaciones mediáticas en las que los principales medios de comunicación retratan a movimientos sociales, activistas y quienes los defienden como criminales o terroristas (OCMAL, 2016).

Breves discusiones sobre los grupos paramilitares en el contexto hondureño comenzaron a aflorar en los medios de comunicación en 2009, dos meses después del golpe, en relación con la reclutación de alrededor de 130 exmiembros de la organización paramilitar más grande de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el propósito de trabajar para empresarios y terratenientes hondureños en el Valle del Aguán y sofocar las protestas nacionales contra el golpe (*El Tiempo*, 2009; *BBC*, 2009). Sin embargo, posteriormente, las menciones a los grupos paramilitares disminuyeron a pesar de que continuó la violencia paramilitar.

Violencia paramilitar sin grupos paramilitares: presencia en los sectores económicos clave

Violencia paramilitar en los agronegocios

La proliferación de actores armados no estatales en casos de disputas y conflictos territoriales se puede observar en los sectores de la agroindustria, la minería, la construcción de represas hidroeléctricas y el turismo. Según una base de datos del Monitor de Derechos Humanos y Violencia Política de Honduras,[3] entre 2009 y 2019, cerca de 40% de todos los casos agrarios involucró agresiones por parte de actores armados no estatales que resultaron en diversas formas de violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos.

Dentro del sector agroindustrial, en particular las plantaciones de palma de aceite en el Valle del Bajo Aguán, se trata de una de las regiones más fértiles de América Latina y también la más mortífera para los defensores de la tierra y el medio ambiente. Entre los 1970 y mediados de los 1990, las tierras del Valle del Aguán pertenecieron a cooperativas campesinas, hasta que la Ley de Modernización Agraria de 1992 revocó las prohibiciones de la venta de tierras de propiedad colectiva (Carasik, 2017). Esto, junto con otros factores, permitió la rápida toma de tierras de cooperativas por un par de grandes empresas, entre ellas Corporación Dinant —propiedad de Miguel Facusse, conocido antes de su muerte como el hombre más rico

[3] Esta base de datos se encuentra en la web violenciahonduras.org. Es producto de un proyecto de colaboración entre Jasmin Hristov (UBC) y Dina Meza de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos en Honduras (Asopodehu), financiado por el Consejo Canadiense de Ciencias Sociales y Humanidades.

de Honduras y uno de los partidarios del golpe de Estado contra Zelaya. Desde 2000 se han formado numerosos movimientos campesinos con el objetivo de disputar la legalidad de estas controvertidas ventas de tierras cooperativas. Gradualmente, representantes de la mayoría de tales movimientos se unieron para coordinarse bajo la Plataforma Agraria del Valle del Bajo Aguán. Dicha organización ha estado exigiendo al gobierno una investigación adecuada sobre las circunstancias en las que se llevaron a cabo las ventas de tierras en la década de 1990, la nulidad de los acuerdos de compra y una reforma agraria nacional integral y justa. Dada la falta de respuesta del gobierno a esos llamamientos, los campesinos se han involucrado en acciones directas en forma de ocupaciones para la recuperación de tierras en disputa.

El Valle del Bajo Aguán fue la ubicación del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) financiado por Estados Unidos que participó en el entrenamiento de los Contras nicaragüenses[4] y el Ejército salvadoreño desde 1950 hasta 1980. En la actualidad, el Valle del Aguán sigue siendo un sitio altamente militarizado, donde los Batallones 14 y 15 de las Fuerzas Armadas han establecido una presencia permanente como parte de la Operación Xatruch II y III (Bird, 2013). El operativo militar-policial de estilo contrainsurgente ha desplegado más de 8 mil efectivos desde 2011, con el objetivo de combatir la violencia relacionada con los conflictos territoriales en la zona. Según un portavoz del operativo, «esta es una fuerza pacificadora (...) Somos una fuerza que escuchará a ambas partes, para ayudarlas a llegar a un acuerdo de convivencia pacífica apoyado por nosotros de acuerdo con nuestras responsabilidades bajo la ley» (Ramsey, 2012). Sin embargo, el personal

[4] Grupos armados de la derecha financiados por Estados Unidos, que se oponían al gobierno sandinista en Nicaragua y estaban activos desde finales de 1970 hasta 1990.

del operativo en realidad protege exclusivamente a los grandes propietarios a costa de los pequeños agricultores. Las fuerzas de Xatruch protegen las plantaciones de palma de aceite junto con la pertinente seguridad privada, desalojan por la fuerza a los campesinos, intimidan a los residentes locales y acosan sexualmente a las mujeres, sin ofrecer protección a las víctimas de la violencia.[5] Según testimonios locales, las fuerzas de Xatruch cosechan el fruto de la palma en la finca Paso Aguán, lo que parece ser un pago en especie de Corporación Dinant, financiada por el BM (Bird, 2016).

El Bajo Aguán también alberga un número alarmante de ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violaciones de derechos humanos contra miembros de movimientos campesinos locales involucrados en disputas y ocupaciones de tierras. Ha habido más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales de activistas o sus familiares en defensa de la tierra[6] (Defensores en Línea, 2016). Además, asesinatos, palizas, torturas, detenciones ilegales, intimidación, destrucción de viviendas, cultivos y ganado, y otras formas de agresión han tenido lugar en el contexto de desalojos violentos forzosos, así como el ataque a activistas y sus familias en el interior de sus hogares o en espacios públicos.

En este entorno altamente militarizado, los actores más comunes que participan en la violencia paramilitar han sido los guardias de seguridad privada y las bandas criminales locales. Según las observaciones de 2013 del grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el uso de mercenarios, en el Valle del Aguán hay una «presunta participación

[5] Entrevista personal con miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria, Honduras, 31 de marzo de 2018, realizada por Jasmin Hristov.
[6] Entrevista personal con voceros del movimiento campesino Plataforma Agraria, Honduras, 31 de marzo de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

de empresas de seguridad privada, contratadas por terratenientes, en violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen asesinatos, desapariciones, desalojos forzosos y violencia sexual» (Human Rights Watch, 2014). El 15 de noviembre de 2010, cinco integrantes del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) —Raúl Castillo, José Luis Sauceda, Ciriaco Monoz, Teodoro Acosta e Ignacio Reyes García— fueron masacrados por fuerzas de seguridad privada de la empresa Orión, contratada por Corporación Dinant. Dinant admitió públicamente que sus guardias de seguridad privada habían llevado a cabo la masacre (Bird, 2013; Human Rights Watch, 2014).

Al participar en acciones que normalmente están restringidas a las fuerzas de seguridad del Estado (es decir, detenciones, interrogatorios y desalojos), así como en acciones que son ilegales, como asesinatos, golpizas y tortura, los guardias de seguridad privada desempeñan un papel muy importante en el mantenimiento de una clima de miedo entre los residentes locales. Un miembro del Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez, con sede en la comunidad de Panamá, municipio de Tocoa, da un ejemplo de ello:

> Al otro día la guardia de corporación Dinant paró a un niño de 12 años y lo tiró al suelo y le quitó una maletilla que andaba, que anda comprando un fresco, iba a dejárselo al papá, el papá lo había mandado en la mañana a traer un fresco y ya iba con el fresco cuando lo paró la guardia de corporación Dinant y lo tiró y lo esculcó, y le esculcó la maleta. «¿Qué llevas aquí, no le llevas alguna arma a tu papá?» «No», le decía el niño temblando, «no, no, aquí está la maleta, mire ve, busque, no llevo armas, yo lo que llevo es un fresco, que le llevo a mi papi», estas son las cosas.[7]

[7] Entrevista personal con miembros del Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez, Honduras, 1 de abril de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

Por supuesto, estos no son casos específicos de la región del Aguán, sino patrones encontrados en todo el país. El 2 de abril de 2020, Iris Argentina Álvarez fue asesinada por guardias de seguridad privada de la empresa Crae's, empleada por el Ingenio Azucarero La Grecia en Marcovia, Departamento de Choluteca, durante un desalojo violento de familias de la cooperativa Cerro Escondido que se habían asentado en la tierra hace más de un año para cultivar alimentos (Iniciativa Mesoamericana, 2020).

No sólo las luchas de los movimientos rurales (así como de otros sectores sociales, como se mostrará más adelante) se enfrentan a la violencia, sino que las propias víctimas a menudo enfrentan cargos penales como usurpación de tierras, posesión ilegal de armas, alteración del orden público y terrorismo. En 2011, el jefe de la policía que trabajaba junto a las operaciones militares de Xatruch declaró que grupos armados extranjeros de Venezuela y Nicaragua se habían infiltrado en el Bajo Aguán para capacitar a los campesinos locales con el fin de desestabilizar el país (*La Prensa*, 2011). En la misma línea, el coronel Germán Alfaro, que dirige Xatruch III, afirmó que las «bandas criminales» armadas con fusiles AK-47 recibieron 7 mil 500 de los grupos campesinos para apoderarse de las plantaciones de palma de aceite y ponerlas a disposición de los campesinos. No se ha presentado evidencia de ello (Human Rights Watch, 2014). Actualmente, la usurpación de tierras es uno de los delitos más comunes de los que se acusa a personas pobres de las zonas rurales. Asimismo, hay al menos 6 mil 200 trabajadores rurales o pequeños agricultores en Honduras que enfrentan cargos de usurpación de tierras (WOLA, 2019). A partir de 2018, esos casos son gestionados por los Tribunales de Jurisdicción Nacional especiales, entidades creadas en 2010 para delitos de alto impacto cometidos por grupos delictivos organizados como el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de dinero.

Violencia paramilitar en la minería

Otro sector con una marcada presencia de actores armados no estatales ha sido la minería. Hoy existen 54 concesiones mineras que infringen la propiedad colectiva de grupos indígenas como los pech, tolupanes, misquitos, chortis, lencas, garífunas y tawahkas (*Telesur*, 2019). Entre 2002 y 2015 fueron asesinados 129 activistas comunitarios antimineros (OCMAL, 2016). Un patrón común en los conflictos mineros es la creación de bandas o «comités informales de seguridad/vigilantes» compuestos por residentes locales a favor de la empresa minera, vinculados a los cárteles de la droga. Uno de los ejemplos destacados proviene del Comité Municipal en Defensa de Bienes Comunes y Naturales del Municipio de Tocoa, Departamento de Colón, conformado en respuesta al daño ambiental causado por la extracción de mineral de hierro en la región. A partir del 1 de agosto de 2018, por más de 88 días, pobladores de comunidades a lo largo del río Guapinol realizaron un campamento de resistencia ambientalista organizado por el Comité, exigiendo el cese de las operaciones mineras de la empresa Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facusse —hija del terrateniente Miguel Facusse. Este último cuenta con permiso para operar en un área que antes formaba parte del Parque Nacional Carlos Escaleras. El parque nacional contiene la fuente de 10 ríos de los que dependen 14 comunidades para su supervivencia diaria. Como ya se argumentó, la legislación económica durante los últimos 30 años ha estado fuertemente sesgada a favor del capital. En 2013, la élite hondureña contó con la expedición del Decreto núm. 252-2013 por el Congreso Nacional mediante el cual disminuyó el área del parque nacional por la tala de 217 hectáreas de la zona núcleo (Olson, 2020), lo que permitió otorgar

concesiones de tierras que solían estar bajo protección ambiental (Ofraneh, 2018) y eventualmente otorgarle a Inversiones Los Pinares el permiso para una mina a cielo abierto. Desde 2014, la empresa ha enfrentado una resistencia local constante y ocho personas han sido asesinadas en este conflicto (Olson, 2020).

El 27 de octubre de 2018, aproximadamente un centenar de manifestantes desarmados en el campamento fueron atacados violentamente por mil 500 efectivos de la Policía Nacional y la Policía Militar con gases lacrimógenos. El campamento fue incendiado, muchos de sus integrantes fueron golpeados, algunos recibieron disparos de bala, y varios de los periodistas presentes fueron heridos por parte de las fuerzas de seguridad y sus equipos fueron destruidos (*El Tiempo*, 2018). El 29 de octubre de 2018, cuando algunos de los manifestantes desarmados intentaron regresar al campamento encontraron a 20 civiles fuertemente armados (que no vestían con uniformes de guardias de seguridad privada) en compañía de miembros de la policía y el Ejército. Los civiles armados comenzaron a disparar contra los manifestantes e hirieron a varias personas, entre ellas Alex Bonilla, quien murió en el hospital poco después. Los hombres armados también incendiaron la casa de Irma Serrano, reconocida líder comunitaria (*Defensores en Línea*, 2018).

Los hombres armados son parte de dos bandas locales conocidas y temidas por miembros de la comunidad local y activistas contra la minería. Las pandillas se involucran en actividades delictivas como el sicariato (asesinato a sueldo) y el tráfico de drogas con el gran y poderoso cartel de drogas Los Cachiros y sus socios comerciales, incluidas las autoridades municipales electas. Estas autoridades municipales se han negado a respetar los referéndums comunitarios que declaran al municipio de Tocoa libre de

todas las actividades mineras y se cree que tienen intereses económicos en la mina.[8] Algunos miembros de una de las bandas son empleados asalariados del municipio. El alineamiento de los intereses del gobierno local y las temidas bandas criminales que trabajan junto a guardias de seguridad privada uniformados, contratados por Inversiones Los Pinares, acentúa el terror y el miedo que sufren los opositores a la mina.

Al igual que la criminalización de los defensores de la tierra y el medio ambiente en el sector de la agroindustria, las personas involucradas en luchas contra la minería y sometidas a violencia estatal y no estatal, enfrentan persecución por ley. En el caso de Guapinol, el secretario de Estado Ebal Díaz acusó a los defensores de estar infiltrados por fuerzas ideológicas financiadas desde el exterior con el objetivo de entorpecer la inversión en Honduras (Ofraneh, 2018). La empresa Inversiones Los Pinares emitió un comunicado alegando que se trata de «falsos ambientalistas», «criminales armados que, financiados por fuentes desconocidas, fueron enviados desde fuera del Aguán para sabotear la construcción de una mina que de otro modo sería responsable, no contaminante y generadora de empleo» (Olson, 2020). Así, 32 de los individuos que habían participado en el campamento en defensa de la tierra y el medio ambiente fueron acusados de usurpación, asociación ilícita, incendio provocado y secuestro y siete de ellos fueron encarcelados en una prisión de máxima seguridad, a pesar de que el Comité de Defensa de los Bienes Públicos y Ambientales recibió el Premio Letelier-Moffitt de Derechos Humanos del Instituto de Estudios de Política de Washington en 2019, en reconocimiento a su trabajo de protección de las fuentes de agua de la contaminación por parte de las empresas mineras (Instituto de Estudios

[8] Entrevista personal con miembros del Comité de Defensa de los Bienes Públicos y Comunes, Honduras, 23 de junio de 2020, realizada por Karen Spring.

de Política, 2019). A partir de 2020, siete siguen en detención preventiva y las 32 personas están siendo procesadas como miembros de un grupo criminal organizado.

Violencia paramilitar en el sector energético

La violencia paramilitar también se ha dirigido a los movimientos sociales que se oponen a los proyectos neoliberales en el sector energético, en concreto en torno a la construcción de represas hidroeléctricas. Uno de los casos emblemáticos es la resistencia indígena a la represa hidroeléctrica Agua Zarca por parte del Consejo Popular Indígena de Honduras (Copinh) en la región de Río Blanco, en el departamento de Intibucá. El Copinh fue cofundado por la activista feminista indígena asesinada, ganadora del Premio Ambiental Goldman, Berta Isabel Cáceres Flores. En 2011, el Copinh comenzó a apoyar a las comunidades lencas de Río Blanco que se oponían a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque. La empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) había recibido financiación de varias instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para construir la presa en un terreno del cual los residentes locales tienen un título de propiedad comunitaria desde 1911 (Bird, 2013a). El principal propietario de DESA es la poderosa familia hondureña Atala Zablah, que tiene familiares y fuertes lazos comerciales con dos grandes bancos hondureños: Ficohsa y BAC Honduras. Las comunidades se oponen a la represa porque el río Gualcarque es sagrado para el pueblo lenca y su construcción cortaría el suministro de agua, alimentos y medicinas para estas comunidades pobres y relativamente aisladas (*BB*C, 2018).

En diciembre de 2015, agentes de investigación de la Policía Nacional Civil detuvieron a García Mejía, quien confesó que DESA lo había contratado para silenciar a miembros del Copinh y afirmó que Berta Cáceres era la primera en la lista de personas a eliminar. Mejía fue liberado cuatro días después de que ejecutivos de DESA usaran su influencia sobre la fiscalía y pagaran a un representante legal para defenderlo (*Criterio*, 2019). Después de su liberación, García Mejía comenzó a trabajar como guardia de seguridad en DESA.

Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su domicilio de La Esperanza a los 44 años de edad (GAIPE, 2017). Después de meses de protestas nacionales e internacionales, las personas vinculadas a DESA finalmente fueron arrestadas. En 2018, siete hombres fueron condenados por el asesinato de Cáceres, entre ellos dos oficiales de DESA, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, y el mayor Mariano Díaz, oficial de inteligencia militar del 15° Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras. El tribunal determinó que los tres estaban involucrados en la planificación del asesinato y la contratación de los sicarios que también fueron declarados culpables de asesinato. El sicario principal, Henrry Javier Hernández, era un exmilitar de las fuerzas especiales destinado en la región del Bajo Aguán y estudió con el mayor Mariano Díaz, también condenado por el asesinato de Cáceres. Antes de su arresto Hernández había trabajado para dos empresas de seguridad privada después de dejar el Ejército, incluyendo una empresa que trabaja con empresas de Walmart en Honduras y otra con Corporación Dinant en el Valle del Aguán.

El 2 de mayo de 2018, Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de DESA y oficial de inteligencia militar entrenado en Estados Unidos, fue arrestado por estar involucrado en el asesinato de Cáceres (*BBC*, 2018). Según uno de los miembros del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE)

que investiga el caso, existía una «estructura criminal compuesta por ejecutivos y empleados de la empresa, agentes estatales y bandas criminales que utilizaron violencia, amenazas e intimidación» para atacar al Copinh y a Cáceres (citado por Malkin, 2017). En el nivel comunitario, DESA colaboró con familias y personas que se beneficiaron económicamente de la presencia de la empresa en Río Blanco y personas temidas por la población local por sus actividades delictivas y reputación de asesinos (Copinh, 2019a; Bird, 2013a). Esto se demostró en extracciones telefónicas presentadas como prueba de caso contra los asesinos de Cáceres. En un mensaje, el ejecutivo de DESA, Castillo, hace referencia al sicario local de Río Blanco, García Mejía, llamándolo «la mejor seguridad en el sitio de la represa» (DPLF *et al.*, 2019).

Desde el asesinato de Cáceres, los miembros del Copinh en Río Blanco han seguido enfrentándose a la violencia. El 10 de diciembre de 2017 desapareció Elvin Saúl Madrid, miembro del Copinh de 18 años. Al día siguiente, el cuerpo de Madrid fue encontrado cerca de las casas de los familiares del sicario Olvin García Mejía. En marzo de 2019 fue asesinado Olban Adonay Gómez, hijo del líder comunitario Mauro Gómez (Copinh, 2019). Poco después del asesinato de Berta, Nelson García, miembro del Copinh, recibió un disparo de camino a su casa después de haber acompañado a una comunidad en Río Chiquito en el departamento de Santa Bárbara, que enfrentaba un desalojo violento. En julio de 2016, el cuerpo de la defensora de derechos humanos y lideresa comunitaria Lesbia Yaneth Urquía Urquía fue encontrado cerca del basurero municipal de Marcala, departamento de La Paz. Lesbia había desaparecido un día antes alrededor de las cinco de la tarde. Fue miembro del Copinh y estuvo involucrada en la oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en el municipio de San José, departamento de La Paz.

Del mismo modo, en la comunidad de San Isidro del Volcán, Departamento de La Paz, integrantes del movimiento indígena Milpah que se opusieron a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Chinacla relatan cómo enfrentan los intentos constantes del Estado de imputar a los campesinos por delitos penales: «En el 2015, nos pusieron un operativo militar de 30 militares, 20 de la Policía Nacional y 20 del Ejército del batallón de Marcal y nueve civiles de la comunidad, donde a nosotros nos pedían la droga, a un niño mío le hicieron tres disparos tipos de éstos en punto de las cuatro de la mañana».[9]

Violencia paramilitar en el sector de turismo

A lo largo de la costa caribeña del norte de Honduras hay aproximadamente 46 comunidades garífunas afroindígenas. Muchos poseen títulos ancestrales colectivos sobre la tierra en la que viven y que cultivan. Desde el surgimiento del neoliberalismo, el Estado hondureño ha rechazado sistemáticamente los derechos territoriales indígenas y ha introducido nuevas legislaciones para despojar sistemáticamente a los garífunas de sus tierras.

El turismo residencial, como en el caso de Indura Beach and Golf Development a lo largo de la costa norte, se ha presentado como una industria ecológica sostenible que puede beneficiar a las comunidades locales. En realidad, el desarrollo del turismo en la costa norte ha supuesto el desalojo forzoso de varias comunidades de sus tierras, entre ellas Barra Vieja, Armenia y Castilla. Las políticas y planes de desarrollo turístico han encontrado una fuerte resistencia por parte de la Organización Fraternal

[9] Entrevista personal con miembros de Milpah, Honduras, 20 de octubre de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

Negra Hondureña (Ofraneh). La organización trabaja con las comunidades garífunas para reclamar tierras ancestrales, desafiando judicialmente el robo de tierras y apoyando proyectos de recuperación de tierras (Gibler, 2017).

Miriam Miranda, coordinadora general de Ofraneh, ha sido víctima de innumerables «amenazas de muerte, criminalización, persecución, acoso e intimidación» durante sus años de activismo (Spring y Russell, 2017). En diciembre de 2011, el gobierno indígena garífuna de Cristales y Río Negro (es decir, la Bahía de Trujillo) presentó una demanda contra el desarrollador de turismo canadiense, Randy Jorgensen, propietario de Life Vision Development (Schertow, 2012) por la adquisición ilegal de sus tierras y fue «acusado de incautación y posesión ilegal de territorios garífunas» (Soto, 2016). En 2015, el juez de un tribunal de Trujillo determinó que no había suficientes pruebas contra Jorgensen, pero le dio al fiscal especial para los pueblos indígenas y los garífunas cinco años para presentar más pruebas. Dos semanas después de la comparecencia de Jorgensen ante el tribunal, Vidal Leiva, miembro de Ofraneh y presidente del Comité de Defensa de la Tierra de Cristales y Río Negro, recibió disparos frente a su casa en Trujillo (Cuffe, 2015). Después del ataque, Leiva informó que los tres hombres armados fueron contratados para matarlo, por su participación en la defensa de la tierra garífuna (Cuffe, 2015). En octubre de 2016, en la Bahía de Trujillo, la policía hondureña, acompañada de un grupo de sicarios, quemó las casas de varias familias garífunas en la comunidad de Guadalupe (Ofraneh, 2016). El terreno en el que vivían estaba destinado al desarrollo del megaturismo y a proyectos de comunidades cerradas para turistas extranjeros, por Jorgensen y Patrick Forseth de Carivida (Ofraneh, 2016; Spring y Russell, 2017).

La violencia llevada a cabo por actores estatales y no estatales ha ido acompañada de la criminalización de líderes comunitarios garífunas que se oponen a los proyectos turísticos. Dado que la costa norte y el mar Caribe son rutas estratégicas de tránsito para el tráfico mundial de drogas, una de las narrativas dominantes difundidas en los medios de comunicación es sobre los esfuerzos de seguridad nacional para combatir la guerra mundial contra las drogas. Los miembros de la comunidad garífuna son acusados con frecuencia de estar involucrados en el tráfico de drogas.

Violencia Paramilitar contra estudiantes, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos

En Honduras, los periodistas y abogados de medios alternativos/independientes que exponen las violaciones de derechos humanos por parte del Estado y las luchas de los movimientos sociales, enfrentan un alto riesgo de sufrir violencia. Entre 2009 y 2013, fueron asesinados 74 abogados y 25 periodistas (Holanda, 2014). La mayoría de los casos permanece impune. La siguiente cita de un miembro de la Plataforma Agraria demuestra el peligro que enfrentan los abogados al defender los derechos de los más desfavorecidos:

> Pues en el 1997 se pone la primera demanda en contra de la familia Facussé y la familia Morales, pero los abogados, siempre sobornados, iban abandonando los casos; o sea, según iba avanzando los terratenientes llamaban a los abogados y si no querían los remataban, entonces tenían que aceptar. Así se fue dando desde 1997. En el 2006 ya teníamos el abogado número siete, y en ese momento hicimos una toma de la finca. Igual el abogado sabía que tenía

> la legalidad, pero también fue sobornado (...) Ahí de Tocoa, se llama Rico. El último abogado que sí se demostró y ganó fue el abogado Antonio Trejo, en 2012, en el caso de la Cooperativa San Isidro, en el caso de la Cooperativa Trinidad y Despertar. Pero el 22 de septiembre lo asesinaron.[10]

Entre 2001 y 2018 fueron asesinados 84 periodistas en Honduras (García, 2019).

El movimiento estudiantil hondureño también se ha visto muy afectado por la represión estatal y la violencia no estatal desde el golpe de 2009. La acción colectiva de estudiantes secundarios y universitarios que protestan contra las políticas de austeridad y la privatización de la educación pública ha sido brutalmente reprimida por la policía estatal y el Ejército; los estudiantes han sido golpeados, encarcelados y asesinados. Según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 21 mil estudiantes han sido asesinados en Honduras entre 2011 y 2018 (C-*Libre*, 2018). Aquí se pueden encontrar tres modalidades principales de violencia paramilitar. La primera es cuando los agentes estatales incurren en acciones que exceden las sancionadas por la ley. Estos incluyen allanamientos de hogares, recolección de información personal, fotografías y seguimiento sin una orden judicial, así como tortura y finalmente asesinato. Estos actores pueden estar uniformados o no, utilizar vehículos sin matrícula y con frecuencia tienen la cara enmascarada. Los siguientes son algunos ejemplos que ilustran dicha modalidad. En septiembre de 2018, durante una marcha de un amplio colectivo de movimientos sociales en el Día de la Independencia Nacional, un adolescente

[10] Entrevista personal con miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria, 1 de abril de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

de 15 años fue arrojado en la parte trasera de una camioneta patrulla policial, fue torturado y logró escapar de lo que describió como un intento de asesinato:

> Nos dijeron que nos iban a llevar a un callejón sin salida y nos iban a matar. Me golpearon un par de veces con la pistola en la cabeza, sentí salir sangre. Luego me metieron el arma en la boca y dijeron que si oían nuestras voces dispararían. Había gente en la calle mirando y tratando de grabar esto en video con sus teléfonos celulares, así que comenzaron a disparar balas reales a los pies de las personas para hacerlas escapar.[11]

El joven finalmente recibió tratamiento hospitalario por las graves lesiones que sufrió en la cabeza y continúa sufriendo impedimentos físicos y psicológicos.

En otro trágico caso, el 30 de agosto de 2018, tres hombres armados con armas de alto calibre, uniformados de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), secuestraron en una camioneta a dos estudiantes del Instituto Técnico de Honduras de una residencia en Tegucigalpa. Al día siguiente, Mario Enrique Suárez Gómez, de 19 años, y Gerson Daniel Meza Medina, de 18, fueron encontrados muertos en la carretera, con marcas de tortura y numerosos disparos (*La Prensa*, 2018). A uno de ellos le rompieron las manos y las piernas, le quitaron los ojos y le cortaron la nariz (Meza, 2018). Los dos jóvenes habían participado en al menos 12 protestas en los últimos meses, exigiendo el subsidio de transporte público para estudiantes que el gobierno les había quitado en reformas anteriores (C-*Libre*, 2018).

[11] Entrevista personal con Francisco (seudónimo), estudiante de secundaria, Honduras, 21 de octubre de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

También estuvieron involucrados en una protesta contra el gobierno pocas horas antes de su secuestro (Meza, 2018). ATIC negó la participación de su personal en el incidente, afirmando que los logotipos del uniforme que llevaban los perpetradores no coincidían con los del uniforme de ATIC (*La Prensa*, 2018). Sin embargo, un examen exhaustivo de una gran variedad de imágenes del personal de ATIC en las escenas del crimen revela una mayor variación en sus uniformes. Además, la forma en la que los hombres armados sacaron a los dos estudiantes y los acompañaron hasta la camioneta sugiere que el primero tenía entrenamiento militar. Las autoridades estatales han atribuido los asesinatos a miembros de bandas criminales que se hacen pasar por agentes estatales, mientras que la cobertura de los principales medios de comunicación se ha centrado en la violencia de las pandillas en el vecindario de las víctimas y en uno de los arrestos anteriores de uno de los estudiantes por cargos de drogas. En otro incidente en el contexto de semanas de protestas de estudiantes universitarios en Tegucigalpa, un civil armado disparó ocho tiros desde un vehículo privado contra estudiantes que protestaban en la vía pública frente a la universidad (*El Tiempo*, 2019). A pesar de que el incidente fue filmado por cámaras de seguridad cercanas, nadie ha sido acusado. El ataque ocurrió en un contexto de represión, detenciones y desalojos violentos de estudiantes que protestaban dentro y en la calle frente de la universidad.

La segunda modalidad de violencia paramilitar contra estudiantes es en forma de seguridad privada. Las amenazas de muerte por parte de guardias de seguridad privada contra estudiantes involucrados en algún tipo de acción colectiva son comunes en la UNAH. En un caso conocido de julio de 2017, estudiantes de la UNAH fueron brutalmente agredidos por una unidad de seguridad privada de la empresa Spartan, mientras ocupaban

una parte de las instalaciones de la universidad, incluidos algunos que se encontraban en huelga de hambre. Además de los guardias de seguridad privada empleados permanentemente por la universidad, Spartan fue contratado por separado por la administración universitaria para desalojar violentamente a los estudiantes. Los agresores golpearon brutalmente a los estudiantes y utilizaron gases lacrimógenos (Rodríguez, 2017).

La última modalidad de violencia paramilitar es la empleada por individuos que pueden ser miembros de pandillas o simplemente sicarios. Un estudiante activista compartió la historia de cómo miembros de la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más notorias de Centroamérica, fueron a su casa y lo amenazaron con matarlo si continuaba participando en las protestas estudiantiles.[12]

Grupos paramilitares emergentes

Como hemos demostrado, gran parte de la violencia contra las comunidades rurales involucradas en disputas por la tierra y luchas ambientalistas, así como contra estudiantes, abogados y activistas de derechos humanos en general, es llevada a cabo por asociaciones de actores estatales y no estatales que no pertenecen a grupos específicos autoidentificados. Sin embargo, también está en marcha un proceso de formación de estructuras paramilitares más identificables. Es posible caracterizar esta formación de grupos paramilitares como en etapa embrionaria, en comparación con otros países como México y Colombia.

[12] Entrevista personal con Eugenio (seudónimo), estudiante de la UNAH, Honduras, 2 de abril de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

Los siguientes tres ejemplos son de la región del Bajo Aguán y las organizaciones mencionadas son/fueron parte de la Plataforma Agraria. El primer caso, de la comunidad de Panamá, demuestra cómo la colaboración entre guardias de seguridad privada, batallones militares y civiles armados ha dado lugar a una unidad paramilitar. Tal grupo armado está liderado por un individuo que fue guardia de seguridad de Dinant y luego formó parte, durante un tiempo, del Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez. Una plantación de palma aceitera llamada Paso Aguán, oficialmente propiedad de Dinant, ha sido disputada por el Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez. Desde 2014 la plantación se utiliza como base para el Batallón Xatruch. Seis individuos de la cercana comunidad de Panamá, afiliados a dicho movimiento, han sido asesinados en la propiedad Paso Aguán, que ahora se conoce entre la comunidad como el «cementerio clandestino». En abril de 2018, los militares y guardias de seguridad privada de Dinant se retiraron oficialmente de la propiedad. En su lugar, un grupo armado liderado por Santos Torres, que según testimonios de campesinos de la Plataforma Agraria era un exguardia de seguridad privada de Dinant, y que también fue miembro del Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez, estableció el control de una zona considerable de la plantación. Desde septiembre de 2018, este grupo armado ilegal de aproximadamente 20-30 hombres que portan armas AK-47 y AR-15 y visten chalecos antibalas, ha llevado a cabo numerosos actos de violencia contra integrantes del Movimiento, como el 16 de enero de 2019 cuando uno de los líderes del Movimiento, Jorge Mejía, recibió disparos en un intento de asesinato.[13] La comunidad ha denunciado todos los casos

[13] Entrevista personal con uno de los voceros de la Plataforma Agraria, Honduras, en enero de 2019, realizada por Jasmin Hristov.

a la policía y a la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (Umviba). En varias ocasiones, Santos Torres fue detenido y poco después liberado. También ha sido visto tomando café con los policías que supuestamente fueron asignados para proteger a los miembros de la comunidad que son beneficiarios de medidas de protección otorgadas por el mecanismo de protección. Según líderes de Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez,[14] el grupo armado opera de acuerdo con los militares y Dinant, con el propósito de aterrorizar a la comunidad y así disuadirlos de emprender acciones de recuperación de tierras o dar la impresión de que la violencia fue causada por conflictos internos de la comunidad, es decir, «campesinos contra campesinos».[15]

De manera similar, un grupo paramilitar conocido como La Confianza surgió en la comunidad de La Confianza en el Bajo Aguán, en 2016. Liderado por el exmilitar Celio Rodríguez, el grupo está compuesto por algunos exmiembros de una cooperativa campesina que se escindió del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). Rodríguez se ha encargado de entrenar y suministrar al grupo uniformes y armas. Los miembros de ese grupo paramilitar han estado persistentemente amenazando, intimidando e intentando asesinar a líderes clave de la Plataforma Agraria. En ese contexto, el grupo asiste a reuniones comunitarias para proponer la venta de la tierra de propiedad colectiva de los campesinos. Según testimonios locales, miembros del grupo se han reunido en numerosas ocasiones con Oscar Nájera, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional derechista. Nájera es un conocido socio comercial del cártel de la droga Los

[14] Entrevista personal con miembros del Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez, Honduras, 21 de octubre de 2019.
[15] Dinant niega cualquier relación con el grupo armado que actualmente controla la propiedad.

Cachiros que anteriormente se encontraba en Tocoa, Colón. Uno de los integrantes del grupo, Osvin Nahum Caballero, quien tiene 11 cargos de homicidio, fue detenido en 2018. Es responsable, junto con Celio Rodríguez, del asesinato de José Ángel Flores, expresidente del MUCA y Silmer George, miembro del MUCA en 2016.

En noviembre de 2019 surgió otro grupo paramilitar de manera similar. Varios miembros de la Cooperativa San Esteban, parte de la organización campesina MARCA, a los que se unieron algunos sicarios formando un grupo paramilitar de 50 hombres fuertemente armados, se apoderaron de la finca de la Cooperativa San Esteban y obligaron al resto de las familias que son miembros de la cooperativa a salir. Actualmente emplean esta estrategia para amenazar a familias de otras cooperativas cercanas como Despertar y La Trinidad (C*riterio*, 2019a).

Reflexiones sobre las tendencias de la violencia y las unidades paramilitares

Como se puede observar, en Honduras la violencia paramilitar es procapitalista y política y se lleva a cabo por actores estatales y no estatales, a menudo a través de la cooperación entre ambos. Las características organizativas de la violencia van desde la pequeña escala (individuos contratados para atacar a miembros de movimientos sociales) hasta grandes grupos que incluyen batallones militares y guardias de seguridad privada. También varían entre asociaciones ambiguas y temporales, agentes de seguridad del Estado, actores no estatales y grupos propiamente formados que se identifican como tales. Los factores que han facilitado la proliferación de la violencia paramilitar son: el

aumento de la militarización, el uso generalizado de la seguridad privada y su cooperación con las fuerzas de seguridad del Estado, y la creación de grupos interinstitucionales (compuestos por policías y militares). Esto último crea condiciones propicias para la participación de la policía y el Ejército en violaciones de derechos humanos, así como la participación de actores no estatales.

Los siguientes patrones pueden observarse en todas las diferentes modalidades de violencia paramilitar. Primero, independientemente de la modalidad a través de la cual se efectúa, la violencia paramilitar trabaja en coalición con la legislación para lograr los objetivos económicos de los capitalistas, así como los establecidos por instituciones internacionales como el BM. Por lo tanto, la violencia paramilitar en este país sirve para sostener las estructuras de poder institucionalizadas, no sólo los intereses privados de los capitalistas individuales.

En segundo lugar, en todos los casos de violencia paramilitar existe un proceso paralelo de criminalización de las víctimas. Ello debe entenderse como parte integral de los requisitos previos o condiciones favorables para el surgimiento del paramilitarismo. En los casos rurales y urbanos se observa la misma tendencia en la que no sólo se registran a las víctimas de la violencia política simplemente como producto del delito, sino que también se utilizan las acusaciones o cargos existentes en su contra para insinuar su participación previa en actividades ilegales que luego presumiblemente podrían utilizarse para explicar su muerte. Así, el proceso de criminalización de miembros de los movimientos sociales que se oponen al régimen y su modelo económico allana el camino para eventualmente normalizar su «desaparición» y reforzar la impunidad. Por ejemplo, los estudiantes activistas son acusados falsamente y cuando son víctimas de

ejecuciones extrajudiciales, como el caso del joven secuestrado por ATIC, su muerte se explica con relación a los cargos anteriores.

Más importante aún, cuando los campesinos, los garífunas y los estudiantes son elevados a la categoría de narcotraficantes mientras que los perpetradores de la violencia paramilitar se reducen a criminales, las dos fuerzas opuestas —los movimientos desde abajo y el instrumento violento utilizado por las élites para silenciarlos— se fusionan en la categoría de criminales, invisibilizando por completo las motivaciones procapitalistas y políticas de la violencia de un lado contra el otro. La individualización de los problemas estructurales y el desvío de la responsabilidad de la violencia de los verdaderos perpetradores y hacia las propias víctimas es una característica recurrente en las cuentas de los medios de comunicación hegemónicos, así como en los discursos de los oficiales gubernamentales y corporativos. Esto es lo que dijo Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), cuando se le pidió que comentara acerca del secuestro y posterior asesinato de los dos estudiantes por parte de ATIC: «No es ATIC. Cualquiera puede ponerse un uniforme. (...) Se sabe que uno de los chicos estaba en el proceso de decidir si se unía o no a la Mara, así que eso puede que tenga algo que ver».[16] De igual manera, Roger Pineda, portavoz de Corporación Dinant, argumentó que la violencia en el Bajo Aguán no es política, sino que principalmente tiene que ver con conflictos internos entre campesinos, desbordes de dinero por ventas agrícolas o algunas actividades ilegales.[17]

[16] Entrevista personal con Hugo Maldonado, Codeh, Honduras, 22 de octubre de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

[17] Entrevista personal con Roger Pineda, Corporación Dinant, Honduras, 30 de agosto de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

Esto lleva al siguiente problema, que es la fragmentación de las comunidades rurales por medio de la infiltración militar y empresarial. Hemos visto que en los tres casos de grupos paramilitares de aparición reciente en una región con intensos conflictos territoriales como el Bajo Aguán, los miembros de esos grupos armados han venido de las propias comunidades bajo la coordinación de militares en activo o exmilitares. Dichos grupos armados locales o actores no estatales a menudo son personas ya temidas por las comunidades locales debido a su participación en el tráfico de drogas y el sicariato. Además de reclutar individuos locales para los grupos paramilitares emergentes, esta estrategia tiene tres propósitos más: *1.* Crea un clima de miedo, sospecha y desconfianza entre las comunidades, que conduce a la ruptura de la unidad y posteriormente al debilitamiento del movimiento. *2.* Justifica una mayor militarización con el argumento de que algunos campesinos están armados. *3.* Refuerza los discursos dominantes de que la violencia se debe al tipo de conflicto interno «campesinos contra campesinos», eximiendo así al Estado y los capitalistas de cualquier responsabilidad.

En conclusión, en Honduras se está presentando el desarrollo y la sofisticación de la violencia paramilitar. Diferentes actores con poder político y económico emplean, cada vez más, el uso de la violencia para defender sus intereses. Tal fenómeno no se puede reducir a un problema de corrupción (por la coalición entre actores estatales y criminales) o a un contexto dominado por «señores de la guerra» como producto de un Estado débil, sino que se debe a la estructura legal que rige y sostiene este tipo de violencia. El Estado crea leyes acordes a las necesidades de los verdaderos criminales, que a base de fuerza establecen su dominación. Cuando la población pobre trata de recurrir a leyes que les pueden beneficiar, el sistema de justicia no les ampara y les pone obstáculos. Si queremos eliminar la violencia es necesario

mirar más allá de los que llevan los fusiles y hacia los que diseñan las leyes y medidas económicas, que son los instrumentos del saqueo legalizado que siempre dependerá del uso de la violencia.

Referencias

Acker, A. (1988). *Honduras: the making of a banana republic*. Boston: South End Press.

Akram-Lodhi, H. A. (2007). «Land, markets and neoliberal enclosure: an agrarian political economy perspective». *Third World Quarterly*, 28(8), pp. 1437-1456.

Barahona, M. (2005). *Honduras en el siglo XX: una síntesis histórica*. Tegucigalpa: Editorial Guaymuras.

Barra, R. (22 de marzo de 2018). «Civic council of popular and indigenous organizations of Honduras: 25 years of struggle and revolution». Recuperado de http://copinhenglish.blogspot.com/2018/03/civic-council-of-popular-and-indigenous.html

Bird, A. (2013). «Petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentada por Rights Action y MUCA». *Rights Action*.

Bird, A. (3 de octubre de 2013a). «The Agua Zarca dam and Lenca communities in Honduras: transnational investment leads to violence against and criminalization of indigenous communities». *Rights Action*. Recuperado de http://rightsaction.org/sites/default/files/Rpt_131001_RioBlanco_Final.pdf

Bird, A. (8 de julio de 2016). «Down where the death squads live: rhe «new» police in Honduras». *Counterpunch*. Recuperado de https://www.counterpunch.org/2016/07/08/down-where-the-death-squads-live-the-new-police-in-honduras/

Boyer, J. (2010). «Food security, food sovereignty, and local challenges for transnational agrarian movements: the Honduras case». *The Journal of Peasant Studies*, 37(2), pp. 319-351. DOI: 10.1080/03066151003594997

British Broadcasting Corporation (BBC) (9 de octubre de 2009). «¿Paramilitares colombianos en Honduras?» Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2009/10/091009 _honduras_denuncia_paramilitares_mr

British Broadcasting Corporation (BBC) (30 de noviembre de 2018). «Berta Cáceres: seven convicted of murdering anti-dam activist». Recuperado de https://www.bbc.com/news/world -latin-america-46394993

Cantor, D.J. y Rodríguez, N. (2015). *Los nuevos desplazados: crimen y desplazamiento en América Latina*. London: Institute on Latin American Studies.

Carasik, L. (2017). «Investing in murder: Honduran farmers sue World Bank's lending arm for fueling land conflict». *World Policy Journal*, 34(2), pp. 24-30. DOI: 10.1215/07402775-4191566

Clark, C. (25 de junio de 2018). «Honduras: Indigenous Garifuna use radio to fight for their land». *Mongabay*. Recuperado de https://news.mongabay.com/2018/06/honduras-indigenous-garifuna-use-radio-to-fight-for-their-land/

C-*Libre* (1 de septiembre de 2018). «Secuestran y ejecutan a dos estudiantes que participaron en acciones de protesta pública». Recuperado de http://www.clibrehonduras.com/index.php/alertas/asesinato/898-secuestran-y-ejecutan-a-dos-estudiantes-que-participaron-en-acciones-de-protesta-publica

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) (2002). *Los hechos hablan por sí mismos: Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993*. Tegucigalpa: Guaymuras.

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) (5 de julio de 2019). «Sicarios contratados por David Castillo para asesinar a

Berta Cáceres aparece muerto». Recuperado de https://copinh.org/2019/07/sicario-contratado-por-castillo-para-asesinar-berta-aparece-muerto/

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) (16 de julio de 2019). «Alerta urgente: Ataque en contra de la comunidad de Río Blanco. Destruyen toda la cosecha de alimentos de la comunidad». Recuperado de https://copinh.org/2019/07/alerta-urgente-ataque-en-rio-blanco/

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) (s/f). «Who we are». Recuperado de http://copinhenglish.blogspot.com/p/who-we-are.html

Criterio (6 de julio de 2019). «Sicario contratado para asesinar a Berta Cáceres aparece muerto». *Criterio.hn*. Recuperado de https://criterio.hn/sicario-contratado-para-asesinar-a-berta-caceres-aparece-muerto/

Criterio (17 de noviembre de 2019a). «Campesinos denuncian que surge nuevo grupo armado en el Aguán». *Criterio.hn*. Recuperado de https://criterio.hn/campesinos-denuncian-que-surge-nuevo-grupo-armado-en-el-aguan/

Cuffe, S. (6 de diciembre de 2015). «The struggle continues: Garifuna land defender shot in Honduras». *Intercontinental Cry*. Recuperado de https://intercontinentalcry.org/garifuna-land-defender-shot-honduras/

Defensores en Línea (6 de abril de 2016). «Honduras con el mayor número de asesinatos en el mundo, perpetrados contra defensores y defensoras del ambiente». *Defensores en Línea*. Recuperado de https://www.defensoresenlinea.com/honduras-con-el-mayor-numero-de-asesinatos-en-el-mundo-perpetrados-contra-defensores-y-defensoras-del-ambiente/

Defensores en Línea (31 de octubre de 2018). «Violent eviction of the encampment for life in Guapinol». *Defensores en Línea*. Recuperado de https://defensoresenlinea.com/urgent-action-violent-eviction-of-the-encampment-for-life-in-guapinol/

Due Process Law Foundation (DPLF), Guatemala Human Rights Commission (GHRC), International Platform Against Impunity, Robert F. Kennedy Human Rights y School of the Americas Watch (SOAW) (2019). *Violence, corruption & impunity in the Honduran energy industry: a profile of Roberto David Castillo Mejía*. Recuperado de https://soaw.org/wp-content/uploads/2019/08/Violence-Corruption-Impunity-A-Profile-of-Roberto-David-Castillo.pdf

Edelman, M. y León, A. (2013). «Cycles of land grabbing in Central America: an argument for history and a case study in the Bajo Aguán, Honduras». *Third World Quarterly*, 34(9), pp. 1697–1722. DOI: 10.1080/01436597.2013.843848

El Tiempo (12 de septiembre de 2009). «Estarían reclutando ex-paramilitares para que viajen como mercenarios a Honduras». *El Tiempo*. Recuperado de https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6086547

El Tiempo (11 de octubre de 2016). «Elzia Paz: ‹Copinh merece un premio por mentir›». *El Tiempo*. Recuperado de https://tiempo.hn/copinh-merece-premio-por-mentir/

El Tiempo (29 de agosto de 2019). «Video: conductor dispara contra estudiantes de la UNAH durante protestas». *El Tiempo*. Recuperado de https://tiempo.hn/video-conductor-dispara-contra-estudiantes-de-la-unah-durante-protestas/

Emanuelsson, D. (18 de diciembre de 2017). «Surge un supuesto grupo paramilitar y cuyo primer blanco militar es Manuel Zelaya». Recuperado de https://www.alainet.org/es/articulo/189919

Escalera-Flexhaug, S. (11 de agosto de 2014). «Canada's controversial engagement in Honduras». *Council on Hemispheric Affairs*. Recuperado de http://www.coho.org

FIAN Honduras (8 de septiembre de 2017). «La reforma agrarian de Honduras 1962». Recuperado de http://www.fian.hn/fianhonduras/la-reforma-agraria-de-honduras-1962/

García, B. (26 de noviembre de 2019). «Estado sin respuestas: quienes matan a los periodistas en Honduras». *Pasos de Animal Grande*. Recuperado de http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/amenazas-a-la-libertad-de-expresion/item/2625-estado-sin-respuestas-quienes-matan-a-los-periodistas-en-honduras

Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) (2017). «Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres». Recuperado de https://gaipe.net/wp-content/uploads/2017/10/Represa-de-Violencia-ES-FINAL-.pdf

Gilber, J. (15 de junio de 2017). «Under the gun: an investigation into the murder of Berta Cáceres». *Sierra Club*. Recuperado de https://www.sierraclub.org/sierra/2017-4-july-august/feature/under-gun-investigation-murder-ber-c-ceres

Gordon, T. y Weber, J. (2016). *Blood of extraction: Canadian imperialism in Latin America*. Halifax: Fernwood Publishing.

Gynther, B. (7 de agosto de 2013). «The murder of Tomas Garcia by the Honduran military». *Upside Down World*. Recuperado de http://upsidedownworld.org/archives/honduras/the-murder-of-tomas -garcia-by-the-honduran-military/

Gynther, B. (19 de marzo de 2014). «Honduras: who should really be on trial for the Rio Blanco sam?» *Upside Down World*. Recuperado de http://upsidedownworld.org/archives/honduras/honduras-who-should-really-be-on-trial-for-the-rio-blanco-dam/

Holland, L. (6 de mayo de 2014). «The lower aguán in Honduras and the deadly battle over land rights». *The Carnegie Council for Ethics in International Affairs*. Recuperado de https://www.carnegiecouncil.org/publications/ethics_online/0093

Hristov, J. (2020). «Pro-capitalist violence and globalization: lessons from Latin America». En Hosseini, S.A.H., Goodman, J., Motta, S.C. y Gills, B.K. (eds.),

The routledge handbook of critical globalization studies (pp. 194-208). London: Routledge.

Human Rights Watch (HRW) (12 de febrero de 2014). «There are no investigations here: impunity for killings and other abuses in Bajo Aguán, Honduras». Recuperado de https://www.hrw.org/report/2014/02/12/there-are-no-investigations-here/impunity-killings-and-other-abuses-bajo-aguan

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (3 de abril de 2020). «Defender killed by security agents in violent, illegal eviction: Iris Argentina Álvarez». Recuperado de https://im-defensoras.org/2020/04/whrdalert-honduras-defender-killed-by-security-agents-in-violent-illegal-eviction/

Institute for Policy Studies (2019). «Celebrating environmental defenders at the letelier-moffitt human rights awards». *Institute for Policy Studies*. Recuperado de https://ips-dc.org/celebrating-environmental-defenders-at-the-letelier-moffitt-human-rights-awards/

Organization of American States (OAS) (23 de febrero de 2017). «Joint press release: the Inter-American Commission on Human Rights, its special rapporteurship for freedom of expression and the office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Honduras express concern over adopted reforms in the Honduran penal code, retrogressive for human rights and freedom of expression». Recuperado de https://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=1054&lID=1

Jubileo (17 de julio de 2014). «Alerta: secuestran a la compañera Miriam Miranda y otros miembros de Ofraneh». *Jubileo Sur América*. Recuperado de https://jubileosuramericas.net/alerta-secuestran-a-la-companera-miriam-miranda-y-otros-miembros-de-ofraneh/

Jubileo (29 de enero de 2016). «Inter-American Court of Human Rights condemns the State of Honduras for violation of the collective rights of the Garifuna people». *Jubileo Sur Americas*. Recuperado de https://jubileosuramericas.net/inter-american-court-of-human-rights-condemns-the-state-of-honduras-for-violation-of-the-collective-rights-of-the-garifuna-people/

La Prensa (17 de agosto de 2011). «Policia hondureña denuncian ‹infiltrados› de Nicaragua y Venezuela en zona de conflicto». *La Prensa*. Recuperado de https://www.laprensa.com.ni/2011/08/17/internacionales/70170-policia-hondurena-denuncia-infiltrados-de-nicaragua-y-venezuela-en-zona-de-conflicto

La Prensa (31 de agosto de 2018). «Hombres vestidos de agentes de la ATIC mataron a estudiantes». *La Prensa*. Recuperado de https://www.laprensa.hn/sucesos/1212208-410/hombres-vestidos-agentes-atic-mataron-estudiantes

Loperena, C.A. (2016). «Conservation by racialized dispossession: the making of an eco-destination on Honduras's North Coast». *Geoforum*, (69), pp. 184-193. DOI: 10.1016/j.geoforum.2015.07.004

Loperena, C.A. (2017). «Honduras is open for business: extractivist tourism as sustainable development in the wake of a disaster?» *Journal of Sustainable Tourism*, 25(5), pp. 618-633. DOI: 10.1080/09669582.2016.1231808

Karol, C. (2018). *Las revoluciones de Berta: conversaciones con Claudio Korol*. Argentina: Ediciones América Libre.

Kerssen, T. M. (2013). *Grabbing power: The new struggles for land, food and femocracy in northern Honduras*. Oakland: Food First Books.

Kneen, J. (2019). «Aura minerals & Honduran government criminalizing 19 Azacualpa community defenders». *MiningWatch Canada*. Recuperado de https://miningwatch.ca/blog/2019/3/4/aura-minerals-honduran-government-criminalizing-19-azacualpa-community-defenders

Malkin, E. (28 de octubre de 2017). «Who ordered killing of Honduran activist? Evidence of a broad plot is found». *New York Times*. Recuperado de https://www.nytimes.com/2017/10/28/world/americas/honduras-berta-caceres-desa.html

McSweeney, K. y Pearson, Z. (2014). «Prying native people from native lands: narco business in Honduras». *NACLA Report on the Americas*, 46(4), pp. 7-12.

McVicar, J. (5 de mayo de 2018). «Pajules under attack: hydroelectric company bypasses resistance by military force». *Upside Down World*. Recuperado de http://upsidedownworld.org/archives/honduras/pajulies-attack-hydroelectric-company-bypasses-resistance-military-force/

Mejía, R. (28 de octubre de 2017). «Más de 60 por ciento de los hondureños viven en la pobreza según el INE». *Tiempo digital*. Recuperado de https://tiempo.hn/60-por-ciento-la-pobreza-ine/

Meza, V. (11 de septiembre de 2018). «Honduran government covers up murder of two student protesters by state agents». *Left Voice*. Recuperado de https://www.leftvoice.org/honduran-government-covers-up-murder-of-two-student-protesters-by

Minority Rights Group International (19 de junio de 2015). «Honduras: Afro-Hondurans». *World Directory of Minorities and Indigenous Peoples*. Recuperado de https://minorityrights.org/minorities/afro-hondurans/

Moncada, E. (2013). «The politics of urban violence: challenges to development in the Global South». *Studies in Comparative International Development*, *48*(3), pp. 217-239. DOI: 10.1007/s12116-013-9133-z

Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL). (2016). «Minería, violencia y criminalización en América Latina. Dinámicas y tendencias». *Informe OCMAL-CENSAT 2016*. Recuperado de https://www.ocmal.org/mineria-violencia-y-criminalizacion-ocmal/

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras (ODHPINH) (15 de septiembre de 2014). *Presentation to the United Nations Universal Periodic Review (UPR)*. Recuperado de https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=1724&file=EnglishTranslation

Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) (13 de octubre de 2016). «El rey del porno canadiense, Randy Jorgensen, amenaza con desalojar comunidad Garifuna de Guadalupe en su territorio ancestral». Recuperado de https://ofraneh.wordpress.com/2016/10/13/el-rey-del-porno-canadiense-randy-jorgensen-amenaza-con-desalojar-comunidad-garifuna-de-guadalupe-de-su-territorio-ancestral/

Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) (28 de octubre de 2018). «Guapinol: desalojo violento y destrucción de áreas protegidas». Recuperado de https://ofraneh.wordpress.com/2018/10/28/guapinol-desalojo-violento-y-destruccion-de-areas-protegida/

Olsen, J. (24 de marzo de 2020). «Honduras's deadly water wars». *The Nation*. Recuperado de https://www.thenation.com/article/world/honduras-mine-conflict/

Orsi, P. y DiLorenzo, S. (24 de julio de 2018). «More than 200 land activists slain last year, watchdog finds». *AP News*. Recuperado de https://www.apnews.com/f222e2937f5d46a38933c57a95699fda

Palacios, M. (14 de junio de 2014). «Empleado de Minerales Victoria acepta que cometió abusos contra defensores de DD. HH». *Honduprensa*. Recuperado de https://honduprensa.wordpress.com/2014/06/17/empleado-de-minerales-victoria-acepta-que-cometio-abusos-contra-defensores-de-ddhh/

Paley, D. (2014). *Drug war capitalism*. Oakland: AK Press.

Paz, L. (14 de agosto de 2019). «Colón: comunidad Garífuna de Vallecito, amenazada y en zozobra ‹por hombres armados›». *El Tiempo*. Recuperado de

https://tiempo.hn/colon-comunidad-garifuna-de-vallecito-amenazada-y-en-zozobra-por-hombres-armados/

Radio Progreso (18 de noviembre de 2016). «Minería, cáncer que sigue afectando a comunidad Nueva Esperanza». *Radio Progreso*. Recuperado de https://wp.radioprogresohn.net/mineria-cancer-que-sigue-afectando-a-comunidad-nueva-esperanza/

Ramsey, G. (31 de agosto de 2012). «Task force takes over security in Honduras' troubled Colon province». Recuperado de https://www.insightcrime.org/news/brief/task-force-takes-over-security-in-honduras-troubled-colon-province/

Rodríguez, S. (17 de julio de 2017). «Ataques en la UNAH revive la década de los 80». *Defensores en Línea*. Recuperado de https://www.defensoresenlinea.com/ataques-en-la-unah-revive-la-decada-de-los-80/

Ryan, R. (27 de marzo de 2008). «The last rebels of the Caribbean: Garifuna fighting for their lives in Honduras». *Upside Down World*. Recuperado de http://upsidedownworld.org/archives/honduras/the-last-rebels-of-the-caribbean-garifuna-fighting-for-their-lives-in-honduras/

Schertow, J. (11 de enero de 2012). «Honduras: Garifuna communities take legal action against Canada's ‹porn king›». *Intercontinental Cry*. Recuperado de https://intercontinentalcry.org/honduras-garifuna-communities-take-legal-action-against-canadas-porn-king/

Soto García, J. (21 de noviembre de 2016). «Garífunas arrested for occupying their own land». Recuperado de https://grassrootsonline.org/blog/garifunas-arrested-for-occupying-their-own-land/

Spring, K. y Russell, G. (17 de noviembre de 2017). «‹Canadian tourism mafia› file trumped-up charges against Garfína leader Miriam Miranda in Honduras' corrupted legal system». Recuperado de https://theviolenceofdevelopment.

com/canadian-tourism-mafia-file-trumped-charges-garifuna-leader-miriam-miranda-honduras-corrupted-legal-system/

Telesur (4 de noviembre de 2019). «Concesiones mineras amenazan tierras indígenas de Honduras». *Telesur.* Recuperado de https://www.telesurtv.net/news/honduras-concesiones-mineras-amenazan-tierras-indigenas-20191104-0018.html

United Nations High Commissioner for Refugees (22 de mayo de 2018). «UNHCR alarmed by sharp rise in forced displacement in North of Central America». Recuperado de http://www.unhcr.org/news/briefing/2018/5/5b03d89c4/unhcr-alarmed-sharp-rise-forced-displacement-north-central-america.html

Washington Office on Latin America (WOLA) (2019). «Human rights protections in Honduras: evaluating state capacity to protect and promote human rights». Recuperado de https://www.wola.org/cam/

World Bank (2001). *Honduras. Poverty reduction strategy paper and join assessment.* Washington, D.C.: World Bank.

World Bank (2018). «Data: Gini Index (World Bank estimate)». Recuperado de https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2015&locations=AR-BO-BR-CL-CO-CR-CU-EC-SV-GT-HN-MX-NI-PA-PY-PE-DO-UY-VE&start=2015&view=bar

World Politics Review (6 de enero de 2017). «Why Honduras remains Latin America's most unequal country». *World Politics Review.* Recuperado de https://www.worldpoliticsreview.com/insights/20856/why-honduras-remains-latin-america-s-most-unequal country

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional